

C.A. de Santiago

Santiago, quince de marzo de dos mil veinticuatro.

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

**PRIMERO:** Que comparece don Samuel Donoso Boassi, abogado, en representación de Inversiones Tarascona Corporation Agencia en Chile, quien de conformidad a lo previsto en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, deduce reclamo de ilegalidad en contra de la decisión adoptada el 28 de septiembre de 2023, en sesión ordinaria N° 1.389, del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, con motivo del proceso de amparo de información pública Rol C-4310-23 y por la cual se rechazó el reclamo administrativo formulado por dicha empresa.

Refiere que la solicitante es una sociedad cuyo principal activo lo constituyen 1.721.399 acciones del Banco, equivalentes al 1,02% del capital de la entidad bancaria.

Narra que por noticia publicada con fecha 21 de diciembre de 2022 en el portal de prensa Biobiochile.cl, se informó al público que, luego de una serie de denuncias realizadas por clientes del aludido Banco ante el Servicio Nacional del Consumidor, esa institución instruyó un procedimiento de investigación y sanción en su contra por cobros indebidos aplicados a los titulares de cuentas corrientes, bajo la figura de supuestos cobros de “honorarios judiciales” mediante la aplicación de cláusulas abusivas presentes en sus contratos de adhesión.

Agrega que, con fundamento en los hechos denunciados, mediante Resolución Exenta N°901, de 25 de noviembre de 2021 el SERCNAC inició un Procedimiento Voluntario Colectivo - PVC - en contra de la institución bancaria. Mediante Resolución Exenta N° 895 de fecha 14 de octubre de 2022, dicho servicio dictó resolución presentando el acuerdo alcanzado con BCI y declarando el término favorable del PVC, por el cual se acordó el cese de la conducta ilícita, deber de informar adecuadamente los ajustes que se realizarán en los contratos de adhesión y la indemnización de los clientes afectados por cobros abusivos en gestiones de cobranza judicial y extrajudicial. Para dichos efectos el Banco reconoce 10.350 clientes afectados, obligándose a restituir la suma total de \$7.286.788.806 pesos, en promedio \$620.131 pesos por cada cliente, el que fue aprobado judicialmente



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCCMXMCKLNJ

con fecha 25 de noviembre de 2022 mediante sentencia dictada en causa Rol V-359-2022 del 9º Juzgado Civil de Santiago, resolución que se encuentra firme y ejecutoriada.

Expresa que, atendida la gravedad de la conducta desplegada por BCI, con fecha 17 de febrero de 2023 solicitó al SERNAC la siguiente información: “(...) copia íntegra del expediente sobre Procedimiento Voluntario Colectivo seguido por el SERNAC en contra del BCI (cobranza judicial), que inició por Resolución Exenta N°901 de fecha 25 de noviembre de 2021.” Requiriendo en particular “(...) la entrega de los siguientes antecedentes: - Documentos aportados por BCI en correo electrónico de fecha 03 de enero de 2022. - Documentos aportados por BCI en correo electrónico de fecha 30 de diciembre de 2021. - Documentos aportados por BCI en correo electrónico de fecha 23 de febrero de 2022. - Documentos aportados por BCI en presentaciones de fechas 14 de abril de 2022, 22 de abril de 2022, 10 de mayo de 2022 y 19 de mayo de 2022.”

En dicha presentación hizo presente también que no era un tercero ajeno o competidor de la sociedad, sino un accionista del banco con una posición lo suficientemente legítima para descartar cualquier causal de la reserva establecida en la ley.

Refiere que dicha petición fue contestada mediante Resolución Exenta N° 214, que denegó parcialmente la entrega de la información solicitada, limitándose a reenviarla a los antecedentes del proceso que figuraban en el portal web institucional y entregarle 36 documentos a título de información complementaria que poco y nada aportaban al conocimiento y comprensión de los fundamentos de la Resolución N° 895, de 2022, del organismo solicitado y, en lo que interesa, negó lugar a la entrega de todos los documentos aportados por BCI mediante correos electrónicos y presentaciones que se habían requerido.

Menciona que la anotada decisión argumenta que el tercero interesado BCI se opuso a la entrega de información, por lo que, de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia estaría legalmente impedido para acceder al requerimiento que le fue formulado. Invocando, además las causales de reserva establecidas en los N°s. 1 y 2 del artículo 20 de la Ley de Transparencia



Apunta que dicho acto administrativo fue reclamado ante el H. Consejo para la Transparencia, y que previos descargos del servicio y el tercero interesado fue rechazado por dicho órgano fiscalizador, el que estimó concurrente la causa de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en atención a que la entrega de la información requerida afectaría el normal funcionamiento del órgano, no en el caso concreto, sino como un precedente que eventualmente podría desincentivar la participación voluntaria de los particulares en otros procedimientos del mismo tipo, impidiendo que SERNAC cumpla con el mandato establecido por el legislador en los artículos 54 y siguientes de la Ley N°19.496. Acogida esta causal, el Consejo no emitió pronunciamiento respecto de la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia invocada por BCI como fundamento de su oposición.

Observa que la decisión reclamada vulneró el ordenamiento jurídico incurriendo en la ilegalidad seria y manifiesta, por los siguientes argumentos:

a) Contrario a lo que sostiene la decisión de amparo, los documentos solicitados por Tarascona, en poder del SERNAC son información pública de conformidad con los artículos 8° de la Constitución, 5° y 10, y 11, letras b), c) y d) de la Ley de Transparencia.

Sostiene que toda información en poder de los órganos de administración del Estado es y se presume pública, salvo que se acredite fehacientemente la existencia de una de las causales de reserva establecidas en la ley, situación que no acontece respecto de los documentos cuya entrega le fue denegada, puesto que se trata de antecedentes que se encuentran en poder del SERNAC y constituyen los fundamentos o los antecedentes esenciales que motivaron el acuerdo adoptado por el órgano público y BCI en el PVC, sancionado mediante un acto administrativo terminal y que forman parte de un expediente administrativo.

A ello suma que el propio artículo 54 H inciso primero de la Ley N°19.496 -Ley del Consumidor- establece como principios que informan el procedimiento voluntario para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores, los de transparencia y publicidad, reforzando -en sede especializada- que los antecedentes, documentos o toda información en poder del SERNAC es de carácter público, incluyendo aquellos solicitados por esa parte.



b) Niega que se configure la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, cuya procedencia, de acuerdo a la propia jurisprudencia del organismo reclamado, supone: 1) Que el procedimiento se encuentre pendiente, en circunstancias que aquel del cual forma parte la información requerida está concluido y, 2) Que su conocimiento vaya en desmedro, en el caso particular, del cumplimiento de las funciones del órgano requerido, lo cual no fue acreditado ni justificado por la decisión del Consejo.

Estima que, por el contrario, existe un interés prevalente y superior reconocido por el artículo 11 letra a) de la Ley de Transparencia -que consagra el principio de relevancia- en conocer los fundamentos de un procedimiento administrativo que tuvo como causa la incorporación por parte del Banco de cláusulas abusivas en los contratos suscritos con sus clientes y millonarios cobros indebidos, que los particulares, y en especial sus accionistas tienen derecho a conocer a cabalidad.

Concluye que las infracciones denunciadas causan un agravio concreto y directo a su derecho constitucional y legal para acceder a información pública.

Pide, en definitiva, se acoja el reclamo, revocando la decisión recurrida, resolviendo en su reemplazo que se acoge el recurso de amparo interpuesto por esa sociedad, accediendo a la entrega de información.

**SEGUNDO:** Que evacuando el informe ordenado don Edison Orellana Ramos, abogado, Subdirector Jurídico (S) del Servicio Nacional del Consumidor, solicitó el rechazo del presente arbitrio.

Expresa en primer lugar que dicho servicio cumplió cabalmente la obligación legal de publicidad e información que rige el PVC de conformidad a los artículos 54 H y 54 L de la Ley N° 19.496 y 1°, 7°, 10, 11 y 13 de su Reglamento, disponibilizando la información, antecedentes y las piezas del expediente que deben ser publicados a través del sitio web institucional.

Advierte que el proveedor, se opuso a la entrega de la información solicitada por diversas razones, que allí detalla, y que ese servicio determinó que la oposición presentada cumplía con lo dispuesto en el artículo en el artículo 20 de la Ley de Transparencia en cuanto a su oportunidad y expresión de fundamentos, y en consecuencia procedía dar aplicación a lo que dicha norma dispone, quedando “ (...) impedido de proporcionar la



documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley".

Hace presente que, sin perjuicio de lo ya indicado, la información aportada por el proveedor, en el contexto de los Procedimientos Voluntarios Colectivos, incluye información de carácter comercial y económica del giro del proveedor, respecto de la cual la entidad bancaria efectuó solicitudes de reserva acorde al artículo 54 letra o) de la Ley N°19.496, las que fueron debidamente concedidas y resueltas a través de las Resoluciones Exentas N°s 119, 120, 402 y 522, todas del año 2022, de SERNAC.

Añade que en el mismo acto que denegó parcialmente la información solicitada, se invocaron además las causales de secreto y reserva contempladas en el artículo 21 N°s 1 y 2 de la Ley de Transparencia.

En el caso de la primera de dichas causales, por cuanto es de la esencia del PVC la voluntariedad, tanto en la participación como en la reparación/indemnización, a las que el administrado se compromete en el acuerdo correspondiente, elemento que de verse afectado, debilitaría dicho procedimiento como método de solución de controversias, imposibilitando la obtención de acuerdos exitosos como ha sido hasta hoy. De modo que la eventual divulgación de la información que fue entregada voluntariamente por el Banco BCI, que no es conocida por terceros, generaría necesariamente el efecto de desincentivar la participación del banco, de consumidores y otros proveedores y/o intervinientes, en futuros PVC seguidos ante SERNAC, respecto de acompañar información relevante, lo que traería como consecuencia la afectación de sus funciones, principalmente respecto del artículo 58 letra f) de la Ley N° 19.496, pues se vería dificultada o bien no podría ejercer la facultad de promover entendimientos voluntarios con proveedores a fin de lograr resguardar a los consumidores.

En cuando a la segunda de dichas causales, ese órgano de la administración del Estado entiende que la entrega y difusión de otros antecedentes, puede afectar los derechos de carácter comercial o económico del proveedor involucrado en el referido procedimiento, ya que este se podría vincular con asuntos de competitividad en el mercado, de resultados económicos futuros, considerando, además, que existe un acuerdo que aún se encuentra en implementación.



Hace presente que los documentos solicitados y denegados por ese servicios son de titularidad de un tercero, a saber del Banco de Crédito e Inversiones no siendo información que constituye, por regla general, información pública a la luz de la Constitución y la Ley de Transparencia, toda vez que no poseen la naturaleza de actos o resoluciones terminales, acorde a lo dispuesto en la Ley N° 19.880, vulnera la expectativa de privacidad con que el proveedor ha participado y aportado información al procedimiento, y la confianza que éste deposita en ese Servicio y al resguardo que se le dará de la información aportada.

Explica que, si bien uno de los principios fundantes del Procedimiento Voluntario Colectivo es la publicidad y transparencia, ello encuentra excepción precisamente en la reserva del artículo 54 letra o) de la Ley N° 19.496, del que hizo uso el BCI.

Aclara que ese Servicio no dio aplicación literal a la causal que señala el reclamante, a saber, artículo 21 N°1 letra b) de la Ley de Transparencia, sino que se invocó la causal genérica del artículo 21 N° 1 y artículo 21 N° 2 de dicho texto legal.

De lo expresado colige que los antecedentes relacionados con los correos electrónicos del proveedor Banco de Crédito e Inversiones, constituyen información reservada, por haberse ejercido el derecho de oposición por parte del proveedor BCI, en los términos descritos en el artículo 20, y, adicionalmente, por concurrir las causales de secreto y reserva contempladas en el artículo 21 N° 1, causal genérica, y N° 2, todos de la Ley de Transparencia.

**TERCERO:** Que, evacuando el informe de rigor, don David Ibaceta Medina, en representación del Consejo para la Transparencia, solicitó que el presente reclamo sea rechazado en todas sus partes, en virtud, de las siguientes consideraciones:

En primer lugar, indica que la información reclamada, detenta solo en principio, el carácter de pública, por obrar en poder de un órgano de la Administración del Estado, pero ello no significa que por ese solo hecho deba ser entregada al solicitante, puesto que el derecho de acceso a la información no es de carácter absoluto, ya que tanto el artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución Política, como el artículo 21 de la Ley de Transparencia, prevén la posibilidad de acreditar la afectación que la publicidad pudiere ocasionar a



algunos de los bienes jurídicos protegidos por dichas normas, permitiendo configurar una o más de las causales de reserva previstas en la misma ley.

Adiciona que, en efecto, en la especie se configura la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, para la cual no basta que esta se invoque sino que es menester que también se acredite una real y efectiva afectación de los bienes jurídicos que se protegen, como efectivamente ha ocurrido.

En ese contexto, argumenta que ese consejo advirtió que el Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) se configura como un instrumento autocompositivo, extrajudicial y no sancionatorio cuya finalidad es lograr una compensación o indemnización voluntaria por parte de una compañía proveedora de bienes o servicios hacia los consumidores, cimentado -esencialmente- en la voluntad del proveedor, de manera que se procura que éste participe activamente al aportar documentación, atender las peticiones del SERNAC y brindar colaboración, con el propósito de lograr una reparación o indemnización adecuada que compense la afectación a los derechos colectivos o difusos de los consumidores perjudicados por las acciones de la empresa en cuestión.

Comenta que ese Consejo compartió las apreciaciones del SERNAC, en orden a que este enfoque demanda un nivel significativo de confianza por parte de estos proveedores hacia el servicio, principalmente en lo concerniente a la gestión de la información que éste realiza, lo que resulta primordial para que los proveedores adopten la decisión de participar en el proceso, proporcionen la información requerida y respondan a las solicitudes de información que se les presenten, por lo que esa corporación estimó que la develación de aquellos documentos declarados reservados mediante las Resoluciones Exentas N°119, 120, 402 y 522, del año 2022, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 54 O de la Ley N°19.496, debilitaría al procedimiento descrito como método de solución de controversias, imposibilitando la obtención de acuerdos exitosos, afectando de manera presente o probable y con suficiente especificidad las funciones del SERNAC, principalmente en lo que respecta a aquella prevista en el artículo 58, literal f) del Decreto con Fuerza de Ley N°3, que lo regula.

**CUARTO:** Que en la presente causa se hizo parte, como tercero coadyuvante, el Banco de Crédito e Inversiones, representado por Paul Mc



Donnell Huerta, quien realizó descargos y observaciones, señalando que la interpretación que efectúa el reclamante para llegar a la conclusión de que la información que requirió es pública, es una interpretación errada, ilegal e inconstitucional, pues la publicidad, comunicación o conocimiento de los antecedentes a que se refiere su solicitud de acceso a la información pública afectaría derechos de carácter económico o comercial de la compañía y el debido cumplimiento de las funciones del Servicio Nacional del Consumidor.

Descarta que el reclamante cuente con alguna posición de privilegio frente a los procedimientos contemplados en la Ley de Transparencia respecto de la información que motiva la presente acción, pues en el marco de dicha normativa, y del presente reclamo, se aplica el principio de no discriminación, tratando a todos los solicitantes en igualdad de condiciones. Por ello, aunque la calidad de accionista le confiera derecho regidos por la Ley N° 18.046, en el contexto de acceso a la información pública, se rige por las mismas reglas que cualquier solicitante, incluyendo las causales de reserva establecidas en la Ley de Transparencia.

Afirma que la publicidad, comunicación o conocimiento de la información solicitada afecta derechos de carácter comercial o económico de la compañía, protegidos por la Constitución, pues reviste el carácter de confidencial, es estratégica y podría causar daños a BCI que terceros hagan uso de la misma, pues contienen información respecto a política y estrategia de cobranza judicial y extrajudicial; gastos; costos; recaudaciones; condonaciones; capitales adeudados por clientes e intereses; clientes del banco en cobranza; detalles de operaciones de crédito de dinero; montos pagados por sus clientes en cobranza, entre otros aspectos.

Razona que la dentro de las excepciones al principio de publicidad se encuentran aquellas establecidas por ley de quorum calificado, calidad que reviste el artículo 54 letra o) de la Ley del Consumidor, por lo que las comunicaciones cuya entrega se requiere tienen el carácter de reservado, lo que en su oportunidad fue debidamente justificado ante el SERNAC, dado que su divulgación podría afectar garantías constitucionales de BCI, particularmente en lo relativo a la afectación del desenvolvimiento competitivo de la compañía y sobre los derechos de propiedad intelectual que posee sobre los documentos elaborados de propia parte, por lo que dicho servicio





accedió a lo solicitado por el banco mediante los respectivos actos administrativos dictados en el Procedimiento Voluntario Colectivo.

Arguye que dicha información es precisamente aquella que la Fiscalía Nacional Económica considera como comercialmente sensible y cuya divulgación o intercambio entre competidores, puede facilitar atentados contra la libre competencia, de acuerdo a la "Guía Asociaciones Gremiales y Libre Competencia: Guía para la Acción" de esa institución.

Por ello, concluye que su divulgación vulneraría la garantía constitucional de respeto a los derechos comerciales, económicos y patrimoniales del banco.

Consigna que la publicidad, comunicación o conocimiento de la información solicitada afecta el debido funcionamiento del Servicio Nacional del Consumidor, reiterando los argumentos que sobre el particular han vertido el organismo reclamado y el tercero interesado.

Precisa que ni el Consejo para la Transparencia, ni el SERNAC, ni BCI invocaron la causal de reserva de la letra b) del N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en relación con la cual el reclamante plantea sus argumentos.

Subraya, finalmente, que el Procedimiento Voluntario de Conciliación consta de varias etapas de las cuales solo se encontrarían cumplidas las del acuerdo mismo y su aprobación judicial, pero todavía estarían pendientes las de implementación del acuerdo y cierre del PVC que es comunicado a consumidores, al proveedor a los organismos reguladores y fiscalizadores.

**QUINTO:** Que, como se sabe nuestra Constitución Política de la República establece como regla general la publicidad de los actos de los Órganos del Estado, al consagrar en su artículo 8 lo siguiente: *"El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional"*.



**SEXTO:** Que, la ley 20.285 concreta la expresión de tales principios, en sus artículos 5° y 10 que indican que debe entenderse por “información pública”. No obstante se evidencia que el hecho de que una información sea pública, no implica necesariamente que sea de “acceso público”.

En efecto, la Constitución Política de la República y, por extensión, los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley 20.285 prevén excepciones. Es el caso determinar si en la situación que se nos plantea, está vedada la información que se solicita, pues la causa legal invocada para mantener en reserva la información de que se trata corresponde a la contemplada en el artículo 21 N° 1 de dicho texto legal, conforme al cual puede denegarse total o parcialmente el acceso a la información señalando:

Artículo 21: *“Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:*

*“N° 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano...”*

**SÉPTIMO:** Que conforme lo resolutive de la decisión de amparo Rol C4310-23 que motiva esta acción, se rechazó el amparo deducido por don Ramiro Araya Ramírez, en contra del Servicio Nacional del Consumidor, por configurarse la hipótesis de reserva del artículo 21° N°1 de la Ley de Transparencia,

Los fundamentos para ello, que esta Corte ha procedido a analizar son entre otros:

a.-) Que mediante la Ley N°21.081, que modifica la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los consumidores, se estableció el Procedimiento Voluntario para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores. En efecto, dicho procedimiento tiene por finalidad la obtención de una solución expedita, completa y transparente, en caso de conductas que puedan afectar el interés colectivo o difuso de los consumidores, siendo este el tipo de procedimiento voluntario que Sernac llevó adelante con el Banco BCI.

b.-) Que en dichos procedimientos voluntarios el proveedor no está obligado a entregar la documentación requerida, lo que no le genera sanción y de hacerlo una vez concluido el procedimiento, cada parte podrá requerir la devolución de todos los instrumentos que haya presentado.



c.-) Que en estos mismos procedimientos a solicitud del proveedor, el Servicio decretará reserva de aquellos antecedentes que contengan fórmulas, estrategias o secretos comerciales, siempre que su revelación pueda afectar el desenvolvimiento competitivo de su titular. Los demás participantes del procedimiento no podrán acceder a estos antecedentes, sino a través de los documentos que contengan el análisis general que de ellos haga el Servicio, los que en ningún caso podrán comprometer la reserva decretada a su respecto.

d.- ) Que Bajo esta lógica, Sernac estimando que la develación de aquellos documentos declarados reservados mediante las Resoluciones Exentas N°119, 120, 402 y 522, del año 2022, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 54° literal o) de la Ley N°19.496, debilitaría al descrito procedimiento como método de solución de controversias, imposibilitando la obtención de acuerdos exitosos.

e.-) Finalmente la decisión en sus fundamentos señala:

“Por consiguiente se afectaría el objeto del procedimiento, en orden a obtener una reparación y/o indemnización voluntaria por parte de una empresa proveedora de bienes o servicios a consumidores, en adecuación de lo previsto en el artículo 54 literal h) del Decreto con Fuerza de Ley N°3, de 2019, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. En el mismo orden de ideas, la develación de la documentación afectaría de manera presente o probable y con suficiente especificidad las funciones del SERNAC, principalmente en lo que respecta a aquella prevista en el artículo 58° literal f) del Decreto con Fuerza de Ley N°3, en orden a “llevar a cabo el procedimiento consagrado en el párrafo 4° del Título IV de esta ley”, pues se vería entorpecida la facultad de fomentar acuerdos de manera voluntaria con los proveedores con el propósito de salvaguardar los intereses de los consumidores.”

**OCTAVO:** Que desde luego la Reclamante por el solo hecho de ser una accionista del Banco BCI no tiene derecho a toda la información del Banco sino aquella que los estatutos y la Ley de Bancos permita y en especial no tiene privilegio alguno para acceder a los antecedentes comerciales y comportamiento de pago reservados de sus clientes.



Al respecto el Banco requerido sobre la solicitud de su accionista, sostuvo que, los documentos solicitados por la requirente contienen información respecto a política y estrategia de cobranza judicial y extrajudicial; gastos; costos; recaudaciones; condonaciones; capitales adeudados por clientes e intereses; clientes del Banco en cobranza; detalles de operaciones de crédito de dinero; montos pagados por clientes del Banco en cobranza, entre otra información.

Hizo presente además que, según lo dispuesto en el artículo 54 O de la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, a los "Proveedores" les asiste el derecho de solicitar reserva expresa respecto de aquellos antecedentes que contengan fórmulas, estrategias o secretos comerciales, estableciendo incluso sanciones penales en caso de que esta reserva se infrinja. Citó el contenido de dicho precepto legal. Contextualizó que, solicitó de forma expresa esta reserva, siendo acogida ésta por medio de las Resoluciones Exentas N° 199 de 14 de febrero de 2022; 120 de 14 de febrero de 2022; 402 de 29 de abril de 2022; y 522 de 8 de junio de 2022,

**NOVENO:** Que, de lo precedentemente referido no cabe sino concluir que el Consejo para la Transparencia en su decisión de Rol C4310-23 no ha incurrido en ilegalidad y no causa un agravio concreto y directo a Inversiones Tarascona Corporation Agencia en Chile, al haberse actuado consistentemente con una causal de reserva de la información ya que aquella afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

Por estas consideraciones y disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 28, 29 y siguientes de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, se declara que **se rechaza**, con costas, reclamo de ilegalidad interpuesto contra la decisión de amparo pronunciada por el Consejo para la Transparencia, en el proceso Rol N° C-4310-2023, emitida por el Consejo para la Transparencia.

**Regístrese y notifíquese.**

Redacción del Ministro Sr Hernán Crisosto Greisse.

**N° Contencioso Administrativo-657-2023.**

Pronunciada por la **Octava Sala** de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Dobra Lusic Nadal e integrada, además, por



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCCMXMCKLNJ

el ministro señor Hernán Crisosto Greisse y el abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCCMXMCKLNJ

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Hernan Alejandro Crisosto G. y Abogado Integrante Luis Hernandez O. Santiago, quince de marzo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a quince de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCCMXMCKLNJ